

Los desafíos del Trabajo Social frente al acompañamiento de los jóvenes en contextos de encierro.

Autora: Lic. Ana Haramboure

E-mail: anaharamboure@gmail.com

Pertenencia Institucional: Facultad de Comunicación social. UNLP

1. Introducción

La temática de la niñez y de la juventud¹ ha estado atravesada y condicionada por las múltiples transformaciones que en las últimas décadas hemos transitado en torno a su concepción y – sobre todas las cosas – en torno a los modos en que los estados han intervenido sobre dichos grupos sociales. La celebración de la Convención de los Derechos del Niño en 1989 y su incorporación a la Constitución Nacional de la Argentina en el año 1994, ha abierto una senda de cambios y transformaciones no sólo a nivel jurídico, sino que también ha dado impulsos – no siempre lineales – al desarrollo de políticas públicas que adecuen el funcionamiento de las instituciones y sus actores a los nuevos requerimientos legislativos.

La Provincia de Buenos Aires, por su parte, sancionó la Ley 13298 de Protección Integral de los Derechos del Niño y, en el año 2006, la Ley 13634 que establece los principios generales de funcionamiento que delinear las áreas y modalidades de intervención del Fuero de Familia y del Fuero Penal Juvenil, quien es el encargado de los delitos atribuidos a los y las jóvenes de entre 16 y 18 años de edad. Es a partir de este andamiaje normativo que se establece una distinción en el tratamiento dado a quienes atraviesen causas asistenciales de quienes estén transitando un proceso penal, siendo el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia el agente rector, dentro del poder ejecutivo, en estos ámbitos de competencia.

Esta nueva perspectiva sobre la(s) juventud(es) y el delito, nos desafían a mirarla como a un binomio que ha abordado a sus componentes de manera escindida. Por una parte, nos encontramos frente a determinado delito que requiere de una sanción específica, según criterios jurídicos. Por otra, se pone de relieve la necesidad de considerar los derechos vulnerados de los sujetos involucrados en estos procesos de castigo (Boga, 2017). La complejidad analítica e histórica

¹ La noción de juventudes es fructífera pero problemática, por lo tanto coincidimos con otros autores, que la juventud es una noción dinámica, sociohistórica y culturalmente construida, que es siempre situada y relacional. No existe un sujeto joven sino una multiplicidad de posibilidades de constitución, aparición y presentación de ese sujeto en el mundo social.

que reviste este binomio resulta desafiante para la elaboración de políticas públicas, y puede conducirnos a analizar de otro modo los diferentes programas, las intervenciones y las acciones que diferentes agencias estatales y de la sociedad civil llevan a cabo con estos grupos poblacionales en general, y en los y las jóvenes en contexto de encierro, en particular.

El Programa Autonomía Joven (PAJ), puesto en marcha por el Organismo Provincial de Niñez a partir del año 2017, se orienta a trabajar en pos de la inclusión social de los y las jóvenes que deben afrontar su egreso de las instituciones del Sistema de Promoción y Protección de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires. Las acciones desplegadas por el Programa consisten en desarrollar tareas de acompañamiento de los y las jóvenes en el regreso a su comunidad, y para que puedan buscar, identificar y fortalecer **oportunidades reales de consolidar un proyecto de vida centrado en sus intereses y en el desarrollo de sus vocaciones**. Esta mirada sobre la autonomía está dirigida a **generar en ellos los recursos materiales, subjetivos y simbólicos**, que les permitan sostener lazos de inclusión social. Esto implica pensar en términos de transformación del sujeto a partir de la construcción de nuevas miradas y nuevos modos de relación con su contexto.

Dado que el Organismo Provincial de Niñez establece la corresponsabilidad entre los municipios y las organizaciones sociales locales como un postulado indispensable para la puesta en marcha del PAJ, la **Fundación CREAR – Desde la Educación Popular** – interviene en el Programa, buscando multiplicar los recursos disponibles, necesarios para la creación y gestión de estrategias que tiendan a fortalecer la inclusión de los y las jóvenes en sus comunidades. Compartiendo el compromiso de trabajar en el fortalecimiento de la autonomía juvenil, Crear despliega en los centros cerrados de la Ciudad de La Plata su proyecto destinado a la implementación de **dispositivos de orientación e inducción (DOI)** para la promoción de la autonomía juvenil.

El presente trabajo busca poner de relieve, entonces, el trabajo mancomunado que se realiza en pos de la efectivización de políticas públicas tendientes a fortalecer las capacidades de agencia de los y las jóvenes que se encuentran transitando medidas punitivas en ámbitos de encierro. Para ello, nos detendremos primeramente en la caracterización general de esta población en el contexto argentino y miraremos las particularidades de la Provincia de Buenos Aires, ámbito de nuestras intervenciones.

2. Jóvenes en contextos de encierro en la Argentina. Caracterización general

Según un estudio realizado por UNICEF² en el 2015, en la Argentina había 7.178 jóvenes en conflicto con la ley penal; de los cuales 1.305 se encontraban en establecimientos de privación de libertad (18, 18%).

De la totalidad de jóvenes que se encuentran en situación de conflicto con la ley penal, un 79,4% se hallaban dentro de programas de supervisión en territorio y un 18,2% dentro de establecimientos de privación de libertad.

Estos datos evidencian la existencia de un **elevado porcentaje de jóvenes cumpliendo medidas privativas de libertad**. Al momento del relevamiento, eran 3.908 los y las jóvenes de hasta 17 años que se encontraban bajo alguna medida penal y 8.716 quienes estaban privados de libertad, lo cual representa el 22,3% del total de esta franja etaria.

Si bien se trata de jóvenes que aún no han alcanzado el límite inferior de edad punible, se encuentran en centros cerrados con medidas judiciales especiales. Los y las jóvenes incluidos en esta franja etaria, es decir los no punibles para las leyes argentinas vigentes, se destacan sobre todo en la región Norte, donde representan un 13,1% de las y los encuestados.

Respecto al **género**, el estudio se realizó sobre una mayoría de varones, quienes representan el 94,3% del total de encuestados en el total del país, mientras las mujeres alcanzan el 5,7% del total de la muestra. Esta distribución es consistente con las características del sistema penal juvenil, en el que se encuentran un porcentaje mucho mayor de varones, respecto la cantidad de mujeres.

En relación a la **situación familiar** de los y las jóvenes del estudio, se observa que el 90% ha crecido en hogares monoparentales maternos, y se puede identificar la presencia de otros familiares como significativa dentro de sus núcleos convivenciales. En este sentido podemos identificar el gran peso relativo que adquieren los parientes de segundo grado en la referencia familiar de los y las jóvenes encuestados, dado que el 61% de ellos han vivido además con sus “abuelos”, “tíos” y “primos”. Estos datos son relevantes a la hora de considerar cómo los vínculos familiares y afectivos delinean no sólo la situación de encierro, sino también las posibilidades de considerar y efectivizar un proyecto de vida alternativo al que los condujo al sistema penal.

Los datos sobre las **trayectorias previas** de los y las jóvenes que se encuentran cumpliendo algún tipo de medida penal nos arrojan el que un 28,3% de ellos ha estado – al menos una vez – en

² Esta investigación indaga las condiciones de acceso a derechos de las y los jóvenes privados de libertad cumpliendo una medida penal. Además, da cuenta de las visiones de los jóvenes sobre sus trayectorias de vida y de las formas en que las sanciones impactan en ellos.

situación de calle, sin registrarse diferencias estadísticamente significativas en las regiones en las que se desarrolló el relevamiento. Conjuntamente, un 14,2% de esos jóvenes refiere haber transitado por algún hogar de menores, como medida de institucionalización previa a la llegada a un centro cerrado de detención. Aquí, la mayor concentración lo obtiene la región de Cuyo (25,7%), seguida por CABA y Provincia de Buenos Aires.

A la vez, al desagregar los **ingresos de estos jóvenes a los dispositivos de privación de la libertad**, nos encontramos con un alto porcentaje de reincidentes (48,3%) que, si bien no llega a superar significativamente en términos relativos a los ingresantes primarios (51,7%), nos indica que cerca de la mitad de los y las jóvenes en situación de encierro, ya lo han estado alguna otra vez, en vinculación con otras causas judiciales. Para el caso de CABA y la Provincia de Buenos Aires estas cifras nos muestran la existencia de un 56,3% de primarios y un 43,7% de reiterantes.

Estos datos resultan claves para poder pensar los **fuertes procesos de desafiliación** (Castel; 1997) que atraviesan a estos jóvenes, y que se desarrollan en el largo plazo de sus cortas biografías. Por desafiliación nos referimos al camino del abandono institucional sistemático sufrido por las poblaciones juveniles y a las formas en que dicho abandono contribuye a la reproducción de los contextos y trayectorias de exclusión, posibles de ser visualizados en la incertidumbre de los proyectos de vida y expectativas de futuro de los y las jóvenes.

Estas relaciones se conforman entre las instituciones y los sujetos, pero también conforman relaciones intersubjetivas que los han arrojado “a la sombra” de la sociedad. (Farías; 2018) Por ello, es necesario reparar y tener en cuenta cómo las instituciones tradicionales han fracasado en su tarea de asegurar las funciones de sociabilización, haciendo del castigo (y del encierro) una cara omnipresente del estado (Daroqui; 2012)

Otros dos elementos clave para figurarnos las trayectorias de vida de estos jóvenes son la educación y el trabajo.

Sus **trayectorias educativas** nos muestran que un 50,8% asistía a la escuela antes de ingresar al centro cerrado, un 77,2% refiere haber repetido al menos una vez algún curso y un 77,6% reconoce haber abandonado alguna vez la educación formal. Si bien la asistencia a la escuela y la continuación o terminalidad de los estudios es uno de los ejes en los que se centra el tratamiento dentro de las instituciones de encierro, estos datos nos muestran una población que ha tenido una trayectoria educativa discontinua, fragmentada y atravesada por dinámicas institucionales fuertemente expulsivas.

Los **indicadores laborales**, por su parte, arrojan que el 77% trabajó al menos una vez antes de su ingreso al centro cerrado, un 60,1% estaba trabajando en el momento inmediatamente anterior a su institucionalización, y un 61% refiere haber transitado por la realidad del trabajo infantil³.

Las **situaciones de salud en general** y el **consumo de sustancias** en particular, debe ser tomada en cuenta para encuadrar el escenario en el que estos jóvenes desarrollan sus vidas y que atraviesan las lógicas de privación de libertad y sus posibilidades de proyección futura.

Los centros en los cuales se desarrolla la privación de libertad de los y las jóvenes, deben organizar programas administrados por personal calificado de prevención en el uso indebido de drogas, el consumo problemático y de rehabilitación. En el marco del relevamiento ya citado de UNICEF, se han registrado numerosas dificultades en el despliegue de dichas estrategias, dado que suelen estar centradas en la abstinencia, en lugar de hacer foco en tratamientos con perspectivas de derechos, salud y reducción de daños (Epele, 2010). Adicionalmente, los programas que se implementen requieren también de la capacitación y apoyo a les familiares y referentes afectivos de los y las jóvenes, a fin de que también ellos puedan apoyar el abordaje del consumo una vez que los jóvenes vuelven a sus hogares. Veremos cómo esto se torna una dificultad en lugar de un facilitador, debido a las lógicas mismas de la situación de encierro y a las grandes distancias que muchas veces separan a los centros cerrados de los lugares donde viven los familiares de los y las jóvenes privados de su libertad.

Las modalidades en las que se aborda el consumo de sustancias, a su vez, suelen estar fuertemente medicalizadas. Atender a la medicalización y a las formas de tratamiento disponibles para el consumo de sustancias de estos jóvenes nos pone de cara al ejercicio de la ciudadanía específicamente a aquel referido al derecho a la salud (y a su acceso).

A este respecto, el relevamiento realizado por UNICEF también incorporó la dimensión de la **salud sexual y reproductiva**, considerando que es un tema de especial relevancia para las edades analizadas, considerando, además, la presencia de hijos en sus trayectorias de vida.

Al respecto, casi la totalidad de los encuestados ya se había iniciado sexualmente, siendo 13 años la edad promedio de la primera relación sexual. Este promedio de edad resulta bastante bajo si se lo compara con el guarismo a nivel nacional que arroja entre 14 y 15 años.

³ Aquí, resulta importante señalar que este dato es posible de ser recabado por las edades de los respondientes. Conjuntamente, presenta fuertes diferencias regionales, debido a las actividades productivas divergentes en las distintas zonas del país.

Por este motivo, resulta necesaria la efectiva aplicación de la Ley N° 26.150 sobre Educación Sexual Integral (ESI), que establece que las personas que reciben educación en cualquier tipo de establecimiento educativo tienen derecho a recibir educación sexual integral. La misma, según la ley, es entendida como la articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. En esta etapa de su desarrollo, es crucial para los jóvenes recibir conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos relacionados con la sexualidad. Asimismo, la ley tiene como objetivo: promover actitudes responsables ante la sexualidad; prevenir los problemas relacionados con la salud en general, y la salud sexual y reproductiva en particular; y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.

Por último, y no por ello menos importante, el relevamiento de UNICEF incluyó en su relevamiento las **vivencias de estos jóvenes respecto al maltrato**.

De todos los y las jóvenes encuestados, un 13,4 % refiere haber recibido maltrato, en donde un 79,7% de los casos ha sido del tipo físico, un 57% verbal y un 32,8% psicológico. Al desagregar estas situaciones de maltrato según quién las perpetró, podemos identificar dos escenarios posibles: dentro y fuera del núcleo familiar.

Todas estas caracterizaciones que hemos retomado resultan esclarecedoras para poder ser puestas en diálogo con las situaciones referenciadas por los y las jóvenes incluidos en el Programa Autonomía Joven implementado por la Fundación. El conocimiento de la situación de los y las jóvenes privados de libertad resulta fundamental, no solo para el análisis de políticas públicas con relación al sistema de justicia penal juvenil, sino también para todo el sistema de justicia, dados los efectos que tiene en la trayectoria de vida de las personas el haber tenido contacto con el sistema penal durante su juventud.

3. Conclusiones

La juventud es una etapa del desarrollo que frecuentemente ha sido definida a partir de las crisis que la caracterizan. Para que el adolescente logre transitar de la niñez a la adultez debe “completar” una serie de tareas que están relacionadas con los cambios biológicos, cognitivos, morales, afectivos y sociales por los que atraviesa, las aspiraciones personales que posee y las expectativas de la cultura a la cual pertenece. Estas tareas le permitirán adquirir una identidad propia, independencia emocional y autonomía económica, para la cual deberá previamente seleccionar y capacitarse en una ocupación. Además, formará su propio sistema de valores, el cual

devendrá en un comportamiento socialmente responsable. Finalmente, pondrá énfasis en la realización de un proyecto de vida personal.

El proyecto de vida supone un conjunto de metas que cada individuo elabora. Retomando a Fernández Alfaro y Sánchez (2014), el proyecto de vida es considerado como aquello que una persona se propone hacer en distintas áreas a través del tiempo, con la intención de desarrollarse. Supone una construcción desde la niñez y desde el ámbito sociocultural en el que se estructuran las identidades, integrando así elementos objetivos, subjetivos e históricos a sus aspiraciones e intereses.

La dimensión de la temporalidad en la elaboración de un proyecto de vida es especialmente importante, ya que ejerce un impacto en la motivación y determina, en gran medida, el modo de aproximarse al futuro, de vivir el presente y de asumir el pasado. De esta manera, la actitud hacia el futuro puede estar acompañada de esperanza, temores o ansiedad, y estará en gran medida influenciada por las experiencias pasadas y presentes y por la manera de elaborar dichas experiencias. Estas perspectivas temporales y las expectativas respecto al futuro se encuentran fuertemente influenciadas por la etapa evolutiva de cada individuo, y por el ambiente y la cultura en el cual se desarrolla.

Si a todos los cambios propios de la adolescencia se suma la experiencia de vivir en una institución, es muy probable que las características de esta repercutan en el desarrollo influyendo, no solo en sus condiciones de vida, sino también en los proyectos que los adolescentes elaboren para el futuro.

Las especificidades que pueden presentar los adolescentes institucionalizados en su desarrollo psicológico y personal podrían tener como consecuencia dificultades al momento de desarrollar un proyecto de vida futura, en la medida en que les resultaría complicado establecer compromisos a largo plazo en las distintas áreas de su vida. De esta forma, a diferencia de los adolescentes que han podido concluir esta etapa del desarrollo adecuadamente y que poseen una orientación hacia el futuro, estos adolescentes podrían estar principalmente orientados hacia el presente o hacia objetivos o plazos más inmediatos.

4. Bibliografía

Beccaria, L (2005). "El mercado laboral argentino luego de las reformas". En: Beccaria, L. y Maurizio, R.(ed.), *Mercado de Trabajo y Equidad en Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.

BOGA, D. (2017) "Políticas sociales y capital humano. El caso de los jóvenes en conflicto con la ley penal en contexto de encierro" En *Crítica y Resistencias: revista de conflictos sociales latinoamericanos*. N° 4. Pp. 14 – 31

Castel, R (1997) *Las metamorfosis de la cuestión social: Una crónica del salariado*. Buenos Aires. Paidós

Colectivo de Derechos de la Infancia (2017) *Informe alternativo de seguimiento del cumplimiento del Estado argentino de la CDN*. Disponible en: https://andhes.org.ar/wp-content/uploads/2013/06/17_Informe-Sombra_Comite-por-los-Derechos-del-Ni%C3%B1o_Colectivo-Infancia.pdf

Epele, M. (2009). "Consumo de PBC y prácticas informales de cuidado de la salud en poblaciones marginalizadas del AMBA". Recuperado de webiigg.sociales.uba.ar

Farias, M. L. (2018) *Trayectorias sostenidas de abandono-TSA: procesos de vulnerabilidad y desafiliación de jóvenes en contexto de pobreza estructural*. Buenos Aires.

Menéndez, E. (1992) *Morir de Alcohol. Saber y Hegemonía Médica*. México, Alianza.